

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
**JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE
TUNJA**

Tunja, treinta (30) de enero de dos mil veinte (2020)

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandantes: Lina Marcela Guasgüita
Demandado: Nación –Rama Judicial –Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Radicación: 15001-33-33-002-**2019-00083-00**

El expediente ingresó al Despacho para resolver sobre la admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Lina Marcela Guasgüita contra la Nación –Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; sin embargo, revisada la misma, se advierte que adolece de algunos requisitos formales y presupuestos procesales, como a continuación pasa a explicarse:

1. De las pretensiones.

En el presente caso no se cumple con lo dispuesto en el numeral 2.º del artículo 162 del CPACA, comoquiera que varios literales de la pretensión 5.ª persiguen condenas idénticas, como a continuación pasa a explicarse:

- Los literales a) y e), b) y f) por cuanto persiguen que la bonificación sea reconocida como factor salarial y, en consecuencia, incluida en la liquidación de las prestaciones sociales desde el 1.º de enero de 2013 y en adelante, esto es, que sean reliquidadas y que tal bonificación al ser parte del salario, continúe computándose para tal efecto.
- Los literales c) e i), toda vez ambas se dirigen a que los valores que, eventualmente, se reconozcan sean indexados aplicando la fórmula establecida para el efecto por el Consejo de Estado.
- Los literales d) y j), mediante los cuales se deprecó el reconocimiento de intereses moratorios.

En consecuencia, a fin de imprimir claridad y precisión a la demanda, la parte actora, en primer lugar, deberá plasmar en una pretensión la declaración relativa a otorgar carácter salarial a la bonificación judicial y en otra la condena encaminada a la reliquidación de las prestaciones con la inclusión de la misma y, en segundo lugar, expresar las demás solicitudes relacionadas con el restablecimiento del derecho en pretensiones únicas e independientes,

dependiendo de lo que se busque con cada una, o aclarar al Despacho en qué se diferencian.

2. De la conciliación prejudicial.

Revisado el libelo introductorio, se advierte que la parte demandante argumentó que para el presente caso no es exigible el requisito de conciliación prejudicial previsto en el numeral 1.º del artículo 161 del CPACA, toda vez recae sobre derechos ciertos e irrenunciables derivados de prestaciones de carácter periódico.

Al respecto, este Estado Judicial encuentra que la demanda se encaminó al reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y, a la consecuente reliquidación de las prestaciones sociales con la inclusión del mismo, asuntos que por versar sobre derechos derivados de una relación laboral vigente pueden predicarse no solo periódicos, sino además indiscutibles y, por ende, no conciliables.

No obstante, la parte demandante, también solicitó el reconocimiento de indemnizaciones, tanto por el no pago oportuno de las prestaciones sociales, equivalente a un día de salario por cada día de retardo (literal g), así como por los perjuicios causados con las decisiones administrativas de las cuales se solicitó su inaplicación y nulidad (literal h).

Frente a la primera indemnización, es claro que se refiere a la sanción moratoria contemplada en el numeral 3.º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, norma que establece:

“ARTICULO 99. El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

(...)

3a. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo.”

De manera que tal indemnización deprecada constituye una penalidad por el incumplimiento de la obligación de consignar oportunamente la totalidad de la cesantía correspondiente al año anterior, en consecuencia, se trata de un derecho particular de contenido económico, por lo que a voces de lo dispuesto en artículo 56 del Decreto 1818 de 1998¹, es un asunto susceptible de

¹ **“ARTICULO 56. ASUNTOS SUSCEPTIBLES DE CONCILIACIÓN.** <Ver Notas del Editor> Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de

conciliación, luego, respecto de esta pretensión, debió agotarse el requisito previo la conciliación extrajudicial.

Esta misma circunstancia se presenta con la pretensión relacionada con el reconocimiento de los perjuicios, que según la parte accionante, se originaron con las decisiones administrativas acusadas, pues, también hace referencia a un aspecto incierto y discutible y, por consiguiente, frente al mismo es exigible el trámite de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

En ese orden de ideas, a la parte demandante le corresponderá acreditar el cumplimiento del requisito procedibilidad contemplado en el numeral 1.º del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, frente a las mentadas pretensiones.

3. De la estimación razonada de la cuantía.

El numeral 6º del artículo 162 del CPACA, acorde con el artículo 157 *ejusdem*, establece que la cuantía debe estimarse de manera razonada en el escrito de la demanda a fin de determinar en debida forma la competencia.

Así mismo, el inciso 2.º esta última norma establece que cuando se acumulen varias pretensiones, la cuantía corresponderá al valor de la que sea mayor, mandato que no se observó en el escrito de demanda, comoquiera que, aunque la parte demandante planteó varias pretensiones de carácter laboral y periódico, fijó este aspecto sumando la totalidad de las diferencias prestacionales deprecadas.

Por ende, la parte accionante, también deberá adecuar este acápite de la demanda, a efecto de que la estimación razonada corresponda, únicamente, al monto más alto solicitado por concepto de un haber laboral, durante los tres años anteriores a la demanda, en concordancia con lo estipulado en el inciso 5.º de la misma disposición.

Por lo anteriormente expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja,

RESUELVE:

PRIMERO.- Inadmitir la demanda presentada por el señora Lina Marcela Guasgüita contra la Nación- Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo."

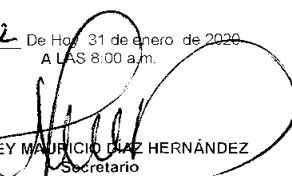
SEGUNDO.- Conceder a la parte actora el término de diez (10) días, para que subsane los defectos señalados en la motivación.

La parte actora deberá allegar con el escrito de subsanación, copias del mismo, al igual que la subsanación **en medio magnético**, para que sean anexados a los respectivos traslados y al expediente, siendo estos necesarios para cumplir en legal forma con la notificación a la entidad demandada.

Notifíquese y cúmplase


HILDEBRANDO SÁNCHEZ CAMACHO
Conjuez

²CZ

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA
NOTIFICACIÓN POR ESTADO LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO
N <u>02</u> De Hoja 31 de enero de 2020 A LAS 8:00 a.m.
 FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ Secretario

² Esta providencia fue notificado en estado electrónico el 31 de enero de 2020 en la página web www.ramajudicial.gov.co, Ferney Mauricio Díaz Hernández – Secretario